NACIONES
UNIDAS

S



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/1997/351
5 de mayo de 1997
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

CARTA DE FECHA 5 DE MAYO DE 1997 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL

En la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 11 de marzo de 1997 (S/PRST/1997/12), el Consejo me pidió que lo mantuviera informado de la situación relativa al incidente ocurrido el 10 de febrero de 1997 en Mostar, en el que una persona murió y otras resultaron heridas en un violento ataque contra un grupo de civiles.

En atención a esa solicitud y como complemento de la información suministrada al Consejo por el Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina (véase el documento S/1997/310, de 14 de abril de 1997), tengo el honor de adjuntar a esta carta el resumen y las conclusiones del informe de fecha 26 de marzo de 1997, titulado "Los derechos humanos y la situación de seguridad en Mostar, 1º de enero a 15 de febrero de 1997". Dicho informe fue preparado por la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas (IPTF) y el Centro de Coordinación de los Derechos Humanos, a solicitud de los directores de los principales organismos de ejecución internacionales. El texto completo del informe se encuentra en los archivos de la Secretaría y se pondrá a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad que lo soliciten.

En relación con la petición del Consejo de que se le mantuviera informado acerca de la situación relativa al incidente del 10 de febrero, lamento comunicarle que después de la carta enviada por el Alto Representante Adjunto Principal el 23 de marzo de 1997 (S/1997/256), las autoridades responsables no han adoptado otras medidas para dar cumplimiento a las peticiones formuladas en la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 11 de marzo de 1997. Sin embargo, la situación en Mostar en general ha mejorado en las últimas seis semanas. Se han suspendido las expulsiones de Mostar occidental y 100 agentes de policía (50 bosnios y 50 croatas) patrullan conjuntamente el centro de la ciudad. Además, la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas ha progresado en sus negociaciones respecto del establecimiento de la fuerza de policía conjunta de la Federación en el cantón de Neretva (Mostar).

Los miembros del Consejo de Seguridad recordarán que en su resolución 1103 (1997) de 31 de marzo de 1997, el Consejo reconoció "la importancia de velar por que la IPTF pueda desempeñar todas las tareas que se le han encomendado, en particular las indicadas en las conclusiones de la Conferencia de Londres", de las cuales la investigación del incidente de Mostar realizada por la IPTF es un ejemplo sobresaliente. En la misma resolución, el Consejo de Seguridad decidió "examinar cuanto antes" las recomendaciones relativas a esas tareas que figuraban en mi informe del 14 de marzo de 1997 (S/1997/224), y que comprenden el incremento de la dotación de la IPTF en 120 agentes. Aprovecho esta oportunidad para reiterar mi recomendación, en la esperanza de que el Consejo de Seguridad la acoja favorablemente.

(Firmado) Kofi A. ANNAN

ANEXO

Situación de los derechos humanos y de la seguridad en Mostar, 1º de enero a 15 de febrero de 1997

informe preparado por la Fuerza Internacional de Policía y el Centro de Coordinación de los Derechos Humanos, de conformidad con la petición formulada el 24 de febrero de 1997 por los directores de los principales organismos de ejecución internacionales

I. RESUMEN

En su reunión celebrada el 24 de febrero de 1997, los directores de los principales organismos de ejecución internacionales pidieron a la Fuerza Internacional de Policía (IPTF) y al Centro de Coordinación de los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Representante que presentaran un informe a la consideración de los integrantes de la Federación, en que se expusieran los pormenores de los incidentes ocurridos antes y después de los actos de violencia del 10 de febrero de 1997. En su carta de 25 de febrero de 1997, el Alto Representante Adjunto Principal señaló que los integrantes de la Federación "deben procurar extraer las conclusiones necesarias [del informe], incluidas las consecuencias personales para todos los oficiales y agentes de policía que no cumplieron su deber". La decisión de preparar este informe se adoptó a partir de la conclusión del informe anterior sobre la investigación de la IPTF, de fecha 24 de febrero de 1997, en el sentido de que las autoridades civiles y de policía en ambas partes de la ciudad no habían respondido eficazmente a los incidentes de vulneración de la seguridad y de los derechos humanos ocurridos en relación con los actos de violencia del 10 de febrero de 1997 y después de éstos. Este informe trata cerca de 200 incidentes ocurridos durante ese período.

Desde el 1º de enero hasta el 10 de febrero de 1997 se registraron en Mostar numerosos actos de violencia, incluidos ataques y expulsiones que, junto con las violaciones de derechos humanos y las restricciones a la libertad de circulación, contribuyeron a crear una situación de desorden creciente en toda la zona. Los residentes de Mostar oriental y occidental, así como los viajeros que entraban y salían de la ciudad fueron objeto de ataques criminales, algunos de ellos perpetrados por elementos de la delincuencia organizada que operan en la ciudad. En los 28 casos conocidos de tales ataques y amenazas, los bosnios y croatas fueron víctimas en igual proporción. Además, durante los 41 días que abarca el período mencionado, hubo más de 40 explosiones e incidentes de disparos con arma de fuego, y seis expulsiones ilegales. En varios de esos incidentes se vio implicada la policía local, ya fuera directamente o por omisión. Desde el 1º de enero hasta el 15 de febrero hubo muy pocas detenciones por la comisión de esos actos de violencia.

Esos acontecimientos siguieron a una serie de incidentes que se habían producido durante el año anterior. Aunque los actos de violencia han aumentado o disminuido de una semana a otra, con algunos períodos críticos y otros períodos de menor actividad, el ambiente en Mostar en general se ha caracterizado por la violencia irrefrenada, con poca intervención de la policía o de los medios políticos para crear un clima de normalidad, paz y seguridad.

El incidente del 10 de febrero de 1997 no fue, por tanto, la culminación lógica de una escalada constante de violencia, sino más bien una consecuencia especialmente grave del desorden que se ha permitido y que ha cobrado auge en Mostar.

El incidente del 10 de febrero se convirtió, no obstante, en el pretexto de dos series de abusos de orden diferente a los actos más esporádicos que los antecedieron. En un período de menos de cinco horas, en la carretera M-17 se presentaron 22 casos de asaltos, robos, amenazas o ataques con piedras contra viajeros croatas. Según se informó, en casi la mitad de esos casos, la policía de Mostar oriental fue directamente responsable por la violencia o no respondió debidamente a las acciones de los civiles bosnios. Desde esa misma tarde y hasta entrada la noche, 23 familias bosnias fueron expulsadas forzosamente de sus hogares en Mostar occidental, y se tuvo noticia de varios otros intentos de expulsión. Esos actos ocurrieron en una zona geográfica determinada y parecían ser obra de grupos de delincuentes bien organizados. En muchos casos las víctimas informaron que los perpetradores se habían identificado como policías o como integrantes de una fuerza de policía especial.

Se han producido seis arrestos relacionados con dos de los incidentes ocurridos en la M-17, incluido un policía fuera de servicio, pero no hubo enjuiciamientos en los 20 casos restantes. Si bien quienes fueron expulsados en forma ilegal pronto regresaron a sus viviendas, no se ha arrestado a los responsables de los desahucios ocurridos en la noche del 10 de febrero. Aunque existen pruebas de la participación de la policía en algunos de los actos criminales de violencia y expulsión que se produjeron tras el incidente ocurrido el 10 de febrero, han sido escasas las investigaciones sustantivas o las medidas adoptadas para identificar a los policías responsables a fin de que den cuenta de sus actos.

De hecho, la policía por lo general no ha investigado los crímenes cometidos por personas de un origen étnico distinto ni ha arrestado a sospechosos de su mismo origen étnico. Resulta evidente que las autoridades policiales de Mostar oriental y occidental no han protegido debidamente a las personas que viven y transitan por la ciudad. Con frecuencia la policía parece ser tan sólo el instrumento de las autoridades políticas, dado que aplica restricciones a la libertad de circulación y permite que quienes cometen actos de violencia no sean procesados. Cuando la policía de Mostar ha intervenido ante actos criminales, sus medidas se han limitado por lo general ha restituir la situación al statu quo ante en vez de arrestar a los responsables de los actos de violencia entre distintos grupos étnicos. La capacidad de la policía para desempeñar sus funciones básicas, incluida la investigación de crímenes, se ve asimismo gravemente limitada por el hecho de que las fuerzas policiales de Mostar oriental y occidental no poseen siquiera información básica sobre los crímenes, ni tampoco cooperan entre sí. Las fallas de la policía han sido tan graves que la población de Mostar oriental y occidental prácticamente no ha contado con protección policial profesional y vive en el temor de la violencia y el acoso.

Las deficiencias de Mostar afectan tanto a las autoridades políticas como a la policía. Un factor fundamental es la ausencia de instituciones locales. En vez de adoptar iniciativas para tratar los problemas de Mostar, los dirigentes políticos sólo dirigen invectivas a "la otra parte" y le asignan

la culpa. Los actos de la dirigencia política han tenido un efecto directo sobre las tensiones que imperan en la ciudad y en el clima de división entre las partes. La muerte de una anciana tras haber sido expulsada de su vivienda, el inicio de la construcción del Teatro Nacional croata, la transmisión por televisión de la quema de una bandera croata, la colocación de "policías durmientes" por parte de la policía de Mostar oriental en el Bulevar y la permanente amenaza, finalmente cumplida, de retirar a la policía local de la fuerza de policía unificada de Mostar, han contribuido al aumento de la tirantez en una ciudad donde la violencia se ha convertido en norma. Las noticias irresponsables e inexactas difundidas por los medios de comunicación locales, con un contenido de provocación y fuertes prejuicios étnicos, han contribuido a la inestabilidad del ambiente de Mostar. Los dirigentes políticos de Mostar han aprovechado esas deficiencias y han utilizado a los medios de comunicación para promover sus propios intereses.

El resumen de los incidentes ocurridos durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 15 de febrero de 1997 da cuenta de una ciudad atrapada por las tensiones étnicas y las explosiones de violencia, sin control policial o político responsable. No puede permitirse que continúe esa situación. La policía debe aceptar su responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico. Quienes cometen crímenes deben ser arrestados y procesados hasta las últimas consecuencias jurídicas. Como primera medida, debe establecerse con toda urgencia y según lo acordado una fuerza policial cantonal integrada y es preciso que participe plenamente en la fuerza de policía unificada de Mostar hasta que esa fuerza esté en condiciones de funcionar. Al mismo tiempo, la dirigencia política debe comprometerse a construir un entorno estable, en el que existan libertad de circulación, protección contra el acoso e instituciones fuertes, eficaces e integradas. El establecimiento de instituciones locales eficaces es una medida fundamental para garantizar que se atiendan los problemas cuando ocurra, antes de que la situación se agrave o se produzcan represalias. Al trabajar juntas, las autoridades políticas y la policía de Mostar podrán garantizar que se atiendan todas las preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad.

VII. CONCLUSIONES

El examen de los acontecimientos que precedieron y siguieron al incidente del 10 de febrero presenta una ciudad perturbada por la violencia entre grupos étnicos y una dirigencia política y policial no incapaz, pero no dispuesta a intervenir. Del 1º de enero al 10 de febrero se produjeron importantes violaciones de la libertad de circulación en las rutas que atraviesan la ciudad, la situación de seguridad era tensa debido a una serie concentrada de tiroteos y explosiones y las fricciones se habían visto agravadas por diversos acontecimientos de amplia difusión (incluido el fallecimiento de una anciana tras su desalojo, el inicio de la construcción del Teatro Nacional, la difusión por televisión de la quema de una bandera croata y la construcción de estatuas de policías dormidos en el Bulevar). Los acontecimientos del 10 de febrero, sin embargo, resaltan por su intensidad y sus consecuencias respecto de los incidentes anteriores. La situación era por cierto muy tensa inmediatamente antes del 10 de febrero de 1997, pero Mostar había experimentado períodos similares de preocupación por la situación en materia de seguridad que habían sido superados sin llegar a producirse actos de violencia.

/...

En el período anterior al 10 de febrero de 1997, las autoridades políticas y policiales de Mostar no tomaron ninguna medida importante para disipar la tirantez creciente, sino todo lo contrario. Los dirigentes de ambas partes de la ciudad se entregaron a los acostumbrados insultos y a la adopción de medidas destructivas de represalia. Ambas partes trataron de explotar los incidentes en su favor en vez de corregir sus causas y consecuencias de una manera constructiva y en plan de colaboración. Por ejemplo, las autoridades de Mostar occidental y oriental exacerbaron los temores generados por los tiroteos y las explosiones. En vez de investigar y procesar a los responsables de las expulsiones o tratar de manera responsable los ataques realizados en la carretera M-17 entre Capljina y Mostar, los medios de comunicación de Mostar occidental y las autoridades pintaron un cuadro que mostraba el ataque a la comunidad croata. Se desatendieron las amenazas y las heridas sufridas por los bosnios. Las autoridades de Mostar oriental, en vez de atender de manera eficaz la preocupación suscitada por los apedreos y las explosiones ocurridos cerca del Bulevar, agravaron el problema al erigir las estatuas de "policías durmientes".

En ese contexto, las medidas de las autoridades de Mostar respecto de la visita al cementerio realizada el 10 de febrero también plantearon problemas. El informe de la Fuerza Internacional de Policía (IPTF) indica de manera concluyente que las autoridades de Mostar oriental fueron notificadas oficialmente de la visita. Sin embargo, dada la situación de tensión imperante en Mostar, los dirigentes de Mostar oriental podrían haber tratado la visita de manera más responsable, e informar a las autoridades políticas correspondientes así como efectuar notificaciones técnicas. Por ejemplo, el Alcalde Adjunto Orucevic no notificó a la oficina del Alto Representante (Sur) pese a que hubo oportunidades de hacerlo tanto durante la visita al cementerio como antes de ella, aunque Orucevic ha admitido que la situación podría ser difícil dado el clima político. Desde luego, esa omisión no constituye una excusa para la reacción criminal ante la visita por parte de algunos policías de Mostar occidental, según consta en el informe de la investigación de la IPTF de 24 de febrero, ni el hecho de que las autoridades no hayan investigado ni enjuiciado a los responsables en forma independiente e imparcial y con todo el rigor de la ley.

Los acontecimientos ocurridos en Mostar entre el 1º de enero y el 15 de febrero de 1997 demuestran ampliamente que tanto las autoridades políticas como la policía no actuaron de manera responsable y eficaz para proteger a todos los ciudadanos. El meollo del problema es la falta de colaboración entre las autoridades locales y la policía para establecer estructuras e instituciones comunes que garanticen el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos de Mostar. Para que se atiendan las violaciones indicadas en el informe, es preciso que se establezcan en Mostar instituciones policiales y políticas eficaces.

La capacidad de la policía de Mostar para cumplir plenamente con sus responsabilidades fundamentales se ve gravemente afectada por la falta de cooperación entre las fuerzas policiales de Mostar oriental y occidental. El problema se manifiesta por el hecho de que sólo mediante los esfuerzos del equipo que preparó el informe se logró que las fuerzas policiales de Mostar oriental y occidental intercambiaran los informes sobre los incidentes que afectaron a bosnios y croatas respectivamente. La policía de ambas partes, con

la dirección y el apoyo pleno de las autoridades políticas, debe colaborar sobre el terreno y compartir la información disponible y establecer enlace para anticipar y reaccionar ante futuros incidentes. Ambas fuerzas policiales deben investigar los incidentes criminales ocurridos antes, durante y después del incidente del 10 de febrero. En especial la serie de ataques en la carretera M-17 y las expulsiones ilegales en Mostar occidental que ocurrieron inmediatamente después del incidente del 10 de febrero deben ser investigados a fondo por la policía de Mostar oriental y occidental. En el curso de esas investigaciones, se debe prestar especial atención a la función de la policía, incluido un examen profundo de todas las denuncias de intervención policial en actos criminales o de la falta de respuesta adecuada a los crímenes cometidos por otros. Las autoridades policiales deben ser profesionales y debe separarse del servicio a los policías responsables de actos ilegales.

Por último, la policía de ambas partes de la ciudad, con el apoyo consciente y sostenido y la supervisión de las autoridades políticas y los medios de comunicación, debe ejecutar plenamente las instrucciones del Gobierno de la Federación respecto de la urgente reestructuración y reconfiguración en una única fuerza cantonal. Entretanto, debe contarse con la participación plena de la fuerza de policía unificada de Mostar.

Pero no es sólo la fuerza policial la que debe integrarse a fin de remediar las violaciones descritas en el informe. Los acontecimientos ocurridos en Mostar del 1º de enero al 15 de febrero de 1997 demuestran ampliamente que la falta de responsabilidad y eficacia de las autoridades políticas de Mostar amenazan la seguridad de todos los ciudadanos de Mostar. Deben establecerse instituciones locales que reaccionen eficazmente ante los incidentes cuando se producen en vez de permitir que los problemas se agraven hasta que llegue el "momento de la retribución". Los dirigentes de Mostar deben comunicarse en forma directa entre sí y aparecer juntos en los medios de comunicación locales en vez de dirigirse a sus interlocutores internacionales y utilizar los medios de comunicación sólo con el fin de promover sus objetivos políticos. Sólo se protegerá y servirá a todos los ciudadanos de la ciudad mediante el funcionamiento adecuado del Gobierno de Mostar, incluido el Ministerio del Interior y la policía.
